



JOSÉ LUIS CARBAJO
Director

Este número aparece en un contexto de gran densidad política: el inicio de nuevos gobiernos regionales y municipales, particularmente el de Lima Metropolitana, imprime un signo de renovación, mientras el debate electoral se encuentra en pleno proceso que, quisiéramos, sea de construcción de agendas educativas concertadas y compromisos claros en materia de equidad y calidad educativa.

La alcaldesa y presidenta regional de Lima Metropolitana, señora Susana Villarán, ha puesto en la agenda política de la ciudad el tema de la descentralización educativa, hecho importante porque sería la última región que se incorpora en este proceso iniciado hace 7 años en el país. Lima, ciudad centralista, con una población que representa el 28% del total de habitantes del país, con contrastes sociales y bolsones de pobreza en los cerros de la periferia, ha concentrado durante muchos años los principales servicios públicos, entre ellos la educación.

Si el Gobierno Municipal decide hacerse cargo de la educación pública, tendrá que desarrollar un proyecto de ciudad educadora que promueva la equidad educativa, la diversidad cultural y los valores de convivencia democrática entre ciudadanos y ciudadanas. En ese camino, tiene ante sí el reto de reactivar la Asamblea de Lima Metropolitana incorporando a los alcaldes distritales y a la sociedad civil para conducir la construcción de este proyecto educativo de ciudad y mejorar significativamente los logros del sistema escolar, así como para enfrentar los graves problemas existentes en la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana y las Unidades de Gestión Educativa Local.

En la mayoría de los gobiernos regionales del interior se viene instalando, no sin dificultades, un estilo de gobierno entre las autoridades educativas y la sociedad civil que propicia la concertación y construcción participativa de las políticas educativas. Da cuenta de ello la existencia de Proyectos Educativos y los currículos regionales. De este modo se ha ido fortaleciendo un movimiento ciudadano por la calidad y equidad de la educación. Cabe destacar en

estos procesos el apoyo del Consejo Nacional de Educación.

En esta línea de promoción de un movimiento ciudadano, se ha concertado en el 2010, en el marco del Proyecto Educativo Nacional y los Proyectos Educativos Regionales, una agenda común compuesta por 6 políticas prioritarias, orientadas a fortalecer lo andado y dar continuidad a las políticas en los próximos 4 años; es decir, generar institucionalidad.

Estas políticas prioritarias son: atención integral y de calidad a la primera infancia, educación en áreas rurales, educación intercultural bilingüe, formación docente, gestión educativa descentralizada y diseño curricular regional. Las referidas propuestas vienen de las regiones y constituyen una agenda educativa nacional que el nuevo gobierno tendrá que tomar en cuenta para gestionar las políticas articulando los tres niveles de gobierno: nacional, regional y local.

Vemos también que en la campaña electoral los partidos han retomado la propuesta de aumentar el presupuesto para Educación al 6% del producto bruto interno; mejorar la infraestructura y atención integral con salud, alimentación y educación; incrementar el sueldo de los docentes teniendo en cuenta el desempeño. (Solo uno de los candidatos ha propuesto cubrir al 100% la cobertura de la Educación Intercultural Bilingüe.)

Si bien estas políticas educativas son importantes, deben estar acompañadas por acciones que hagan posible erradicar la pobreza y que permitan construir un país más inclusivo. Los cambios que proponen los candidatos estarán limitados si mantienen el mismo modelo de desarrollo económico y social. La igualdad y la equidad en educación tienen que construirse con un paradigma político distinto de justicia, que exprese un modelo centrado en la persona y sus derechos, para edificar un Perú intercultural, democrático y con desarrollo humano sostenible.